

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	EJECUTIVO LABORAL
DEMANDANTE	MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ PÉREZ y JUAN DIEGO MÚNERA ÁLVAREZ
DEMANDADO	MARIO ADOLFO BUSCHE VENGOECHEA
RADICADO	05001-31-05-017-2016-00146-02
ORIGEN	JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
TEMAS Y SUBTEMAS	EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
DECISIÓN	CONFIRMA

AUTO INTERLOCUTORIO No. 443

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N° 038 de 2023, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la apoderada judicial de los **DEMANDANTES** contra el auto que resuelve las excepciones de mérito, adiado 15 de agosto de 2023, proferida por el JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN dentro del proceso ejecutivo laboral de la referencia.

ANTECEDENTES

Los señores **JUAN DIEGO MÚNERA ÁLVAREZ** y **MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ PÉREZ** adelantaron demanda ejecutiva laboral a continuación de ordinario en contra de **MARIO ADOLFO BUSCHE VENGOECHEA**, en virtud de lo decidido dentro del proceso con Radicado 2009-00832, desatado en primera instancia en Sentencia del 28 de septiembre de 2012, modificada y adicionada por la Sala Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal de Medellín en decisión del 29 de agosto de 2014, solicitando librar mandamiento ejecutivo por los conceptos allí reconocidos (f. 1 a 2 Archivo 01 ED).

ACTUACIÓN PROCESAL

En razón de lo anterior, el JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN profirió el Auto N° 076 del 25 de febrero de 2016, en el que libró mandamiento de pago en contra de los demandados en los siguientes términos:

“(…) Por los siguientes conceptos:

- TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL M.L.C. (\$3.200.000,00) por concepto de cesantías.
- TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M.L.C. (\$348.000,00) por concepto de intereses a las cesantías.
- UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS (\$1.600.000,00) por concepto de vacaciones.

- *DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L.C. (\$2.900.000,00) por concepto de prima de servicios.*
- *CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M.L.C. (\$5.466.677,00) por concepto indemnización por no consignación de cesantías.*
- *DOCE MILLONES DE PESOS M.L.C. (\$12.000.000,00) por concepto de indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T.*
- *Por los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superfinanciera desde el 29 de abril de 2011 hasta el pago efectivo de las prestaciones sociales y las vacaciones adeudados. Condénese a la demandada al pago de los intereses moratorios, equivalentes a la tasa más alta permitida.*
- *UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SESICIENTOS PESOS M.L.C. (\$1.417.600,00), por concepto de las costas y agencias en derecho (...).*

En contra del mandamiento, la parte ejecutada formuló las excepciones de: “(...) **TEMERIDAD Y MALA FE, INDEBIDA NOTIFICACIÓN y PRESCRIPCIÓN** (...)”. Para tal efecto, arguyó que lo solicitado por los ejecutantes no está llamado a prosperar, como quiera que estos en realidad no buscaron un medio para recaudar lo peticionado en la demanda ejecutiva, sino un sinnúmero de acciones y solicitudes de medidas cautelares, las cuales ninguna les prosperó, lo que ha tenido su efecto, en tanto no ha logrado tener vida financiera.

Agregó que solo en el mes de febrero de 2023, al intentarse el secuestro de un establecimiento de comercio que fue de su propiedad, pudo ser informado sobre la existencia del proceso a través del actual propietario, circunstancias por las que también sostuvo la configuración de una indebida notificación.

De otro lado, expuso que operó la prescripción al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 CGP, como quiera que desde el año 2017 existía la carga de notificar en debida forma la demanda ejecutiva, en la medida que ya se habían decretado las medidas cautelares respectivas, pero los demandantes omitieron dicha obligación, transcurridos cinco (5) años después de ejercida la acción judicial (Archivo 22 ED).

Mediante Auto del 21 de mayo de 2023 se corrió traslado a la PARTE DEMANDANTE de las excepciones propuestas por el ejecutado, la que negó la existencia de temeridad y mala fe, por cuanto la demanda fue impetrada a continuación del ordinario en el que resultó condenado el citado, que justamente no ha cumplido con lo allí dispuesto.

Luego, indicó que de parte del accionado no ha habido voluntad o interés de buscar a los demandantes, con la finalidad de cancelar la obligación, por lo que pretende desentenderse del trámite, con excusas que no son procedentes, debiendo entonces continuarse con la ejecución (Archivo 25 ED)

DE LA PROVIDENCIA APELADA

En providencia del 15 de agosto de 2023, el JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN decidió:

“(...) PRIMERO. DECLARAR PRÓSPERA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, propuestos por la parte ejecutada, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. SE ORDENA LEVANTAR las medidas cautelares decretadas y que se encuentran perfeccionadas. Líbrese oficio dirigido a la secuestre. (Los oficios se librarán una vez quede en firme la presente decisión)

TERCERO. Terminado el proceso se ordena dar salida en el sistema de gestión Siglo XXI

CUARTO: Costas a cargo de *_la parte ejecutante_* y a favor del ejecutado, Se fijan las agencias en derecho en **UN MILLONES PESOS M.L. (\$1'000.000)**. Por Secretaría, liquídense los gastos del proceso (...)

Para arribar a esta decisión, la Juzgadora comenzó por mencionar que según lo dispuesto en los artículos 488 CST y 151 CPLSS, los derechos laborales prescriben en tres (3) años, contados desde cuando la obligación se hace exigible; que en el presente caso, en lo atinente a lo decidido en la sentencia materia de ejecución, su exigibilidad data del 29 de agosto de 2014; y para el caso de las costas, desde cuando estas quedaron en firme, a saber, el 29 de enero de 2016.

Así mismo, expuso que debía tenerse en consideración lo previsto en el artículo 90 CGP, que regula la interrupción de la prescripción con la radicación de la demanda, siempre que el demandado sea notificado dentro del año siguiente a la notificación al actor del auto admisorio.

En ese contexto, explicó que el mandamiento estaba compuesto por varios *ítems* derivados de la condena impuesta en sentencia como tal (prestaciones e indemnizaciones), respecto de las cuales consideró viable contar el término prescriptivo desde cuando quedó en firma la sentencia, esto es, desde el 29 de agosto de 2014; y en lo atinente a las costas, desde la ejecutoria del acto que resolvió su liquidación, desde la firmeza de esta decisión, a saber, el 29 de enero de 2016, teniendo en cuenta lo previsto en la normativa procesal laboral para este punto.

Desde esa perspectiva, señaló que la demanda ejecutiva fue presentada el 11 de diciembre de 2015, librándose mandamiento de pago a través de Auto N° 076 del 25 de febrero de 2016; siendo así, esta decisión debió notificarse a más tardar el 25 de febrero de 2017, acto que solo vino a perfeccionarse en el año 2023, por lo que coligió que no operó la interrupción de la prescripción reglada en el artículo 94 CGP, procediendo la declaratoria de prescripción debidamente propuesta por el accionado (Archivo 31 ED)

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada judicial de la parte **DEMANDANTE** expuso su desacuerdo con lo decidido, argumentando que el demandante tenía pleno conocimiento de lo decidido en la sentencia base de recaudo, lo que mantiene inalterados los principios de lealtad procesal, igualdad y economía procesal; de allí que estima la togada, no cabe discutirse el pago de la condena que le fuera impuesta, y como quiera que la demanda ejecutiva se presentó dentro del término estipulado en el artículo 306 CGP, consideraba por ello que el mandamiento se notificaría por estado, entendiendo que el ejecutado conocía lo ordenado en el proceso ordinario, y sobre la ejecución conexa, por lo que en su criterio, resultaba claro que no debía notificarse de manera personal.

Agregó que el propósito de la parte demandada con la proposición de excepciones, es dilatar el cumplimiento, contradiciendo la realidad, pues desconoce el pago de la condena en su contra, cuestión en la que el Juez puede ejercer los poderes correccionales, que tiene a su alcance, para velar por la materialización de los derechos de sus defendidos. En este punto, hizo énfasis en que durante el curso de la ejecución también procuraron el perfeccionamiento de medidas cautelares, destacando que nunca se han violentado los derechos al debido proceso, defensa y contradicción.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apodera judicial de la parte **DEMANDANTE** arrió alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos planteados en la sustentación del recurso de alzada, tras considerar que el demandado tenía pleno conocimiento sobre el cobro de la condena

contemplada en la sentencia base de ejecución, conforme lo dispuesto en el artículo 306 CGP y Sentencia STL12147-2017, a partir de lo cual insistió en que el ejecutado fue notificado por estados del mandamiento de pago, debiendo velarse por la materialización de los derechos reconocidos en sentencia, en virtud de lo cual solicitó la revocatoria de la decisión (Archivo 03 Tribunal).

PROBLEMA (S) A RESOLVER

Visto lo anterior, el asunto que concierne a la Sala estriba en determinar si procede continuar la ejecución en contra de **MARIO ADOLFO BUSCHE VENGOECHEA** por los conceptos descritos en el mandamiento de pago; o si como lo resolvió el *a-quo*, operó la prescripción conforme lo indicado en el proveído materia de la impugnación.

CONSIDERACIONES

Es preciso indicar que acorde al numeral 9° del artículo 65 del CPT y SS, la decisión sobre las excepciones en el proceso ejecutivo es apelable. En consecuencia, la Sala resolverá los recursos siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A CPL, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Como es bien sabido, ante la reducida regulación adjetiva laboral respecto del trámite ejecutivo, en virtud de la remisión normativa contenida en el artículo 145 CPLSS, en procesos como el estudiado debe acudir principalmente a lo reglado en el CGP en relación con las fases a agotar en la ejecución. En esa senda, el artículo 430 *ejusdem*, estipula que, presentada la solicitud de ejecución “(...) *el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal (...)*”. Luego, de llegar a darse el cumplimiento de la obligación o el pago dentro del espacio concedido, señala el artículo 440 CGP, solo habrá lugar a condenar en costas al ejecutado, quien a su vez tendrá la posibilidad de solicitar la exoneración de este rubro.

Así mismo, al tenor del artículo 442 CGP, dentro de los 10 días siguientes al mandamiento, el ejecutado tiene la posibilidad de presentar excepciones de mérito, que en casos donde el título base del recaudo proviene de una sentencia, solo es dable formular “(...) ***las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida. (...)***”.

Justamente, a través de las excepciones de fondo se ataca el derecho reclamado en sí mismo, alegando que éste no ha existido, o que habiendo nacido se modificó **o va se extinguió**, como lo encontró probado la Juez primera instancia en este asunto.

En ese sentido, cumple indicar que en el particular, la ejecución adelantada se fundamenta en el contenido de la **sentencia del 28 de septiembre de 2012** proferida por el JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, modificada y adicionada por la SALA SEXTA LABORAL DE DESCONGESTIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN en **sentencia 30 de septiembre de 2014**, en la que se dispuso el pago de ciertos créditos laborales (prestacionales e indemnizatorios) en favor de **JUAN DIEGO MÚNERA ÁLVAREZ** y **MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ PÉREZ** y a cargo de **MARIO ADOLFO BUSCHE VENGOECHEA**, al igual que por las costas del proceso ordinario, liquidadas y aprobadas en **providencia del 20 de noviembre de 2015**, determinación notificada en estados del 23 de noviembre de esa anualidad (f. 3 a 6 Archivo 01 ED).

No obstante lo anterior, la Juez de primera instancia expuso que pese a la procedencia del mandamiento librado, conforme lo previsto en el artículo 94 CGP, era claro que la parte

ejecutante tenía un plazo para notificar al demandado, a efectos de mantener los efectos de la interrupción de la prescripción con la radicación de la demanda, el que tenía como baremo final el 25 de febrero de 2017, acto que solo se satisfizo en el año 2023, época para la cual había transcurrido más del trienio exigido para la consolidación del efecto extintivo de la prescripción.

A esta decisión se opuso la apoderada de la parte actora, argumentando, en síntesis, por un lado, que el extremo ejecutado conocía el alcance de las obligaciones impuestas en la sentencia del trámite ordinario, más aún cuando la demanda ejecutiva se presentó en los límites temporales del artículo 306 CGP, a fin de entender que el mandamiento ejecutivo se tuvo notificado por estados. De otro lado, indicó que durante lo que va del proceso ejecutivo se ha buscado el perfeccionamiento de las medidas cautelares solicitadas.

Pues bien, para resolver la Litis es necesario remitirse a lo regulado en los artículos 488 CST y 151 del CPLSS, que disponen:

“(…) Artículo 488. Regla general. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.

(…)

Artículo 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual. (…)”.

En ese sentido, huelga anotar que, el Órgano de Cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en sentencia CSJ SL219-2018, precisó como parámetro para contabilizar la prescripción *“(…) la exigibilidad de la obligación para comenzar a contar el término cuyo transcurso, sin el accionar del acreedor conduce a la extinción del derecho (…)*”; providencia en la que se rememoró la sentencia SL4222 de 2017, en la que cual consideró:

“(…) “En las materias del derecho del trabajo y la seguridad social, sabido es, como ya se recordó por la Corte en la sentencia atrás citada, que son dos los preceptos que de manera general y con el carácter de orden público reglan la prescripción extintiva de la acción o del derecho: los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (…). Pero es importante subrayar que ambas disposiciones contemplan una prescripción trienal cuyo término de consolidación empieza a correr desde la ‘exigibilidad’ de la respectiva obligación. También en ambas no basta para la pérdida o extinción del derecho el simple paso del tiempo previsto en la ley, sino que se requiere, además, la inactividad en el derecho o en el ejercicio de la acción durante ese mismo tiempo, pues a decir de la segunda disposición, la simple reclamación escrita del trabajador, recibida por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinados, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso de tiempo igual.

De ese modo, la prescripción extintiva de acciones y derechos en estas materias opera atada no solamente al transcurso de un tiempo de inactividad previsto en la ley, con la posibilidad de ser interrumpido mediante una reclamación formal y singularizada, sino también, a la de la ‘exigibilidad’ de la obligación demandada, entendida ésta como la posibilidad de hacerse efectiva o ejecutable sin necesidad de advenimiento de hecho alguno, pues cuenta con la característica de ser pura y simple; o porque estando sometida a plazo o condición, se ha producido el fenecimiento de aquél o el cumplimiento de ésta (…)” (Subrayas y negrillas fuera de texto).

Resáltese que, el tópico estudiado en este escenario, es decir, la prescripción, corresponde a un asunto sustancial, en la medida que corresponde a una institución jurídica con la fuerza de extinguir los derechos en favor de una parte, por efectos del paso del tiempo, concatenado con la inactividad del citado beneficiario, figura que aparece consagrada

precisamente en codificaciones sustantivas, como el artículo 488 CST y 2530 Código Civil, misma que, requiere incluso de su rogatoria o invocación por parte del interesado, en la medida que procesalmente está proscrita la posibilidad de declararse probada de oficio.

Bajo esta línea argumentativa, sea el momento para definir que, toda vez que la demanda ejecutiva que nos ocupa, fue presentada el **11 de diciembre de 2015**, esto es, durante el periodo en el que aún regía en este distrito judicial el anterior Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), en el Distrito Judicial -Antioquia – Chocó entró en pleno vigor el **1º de enero de 2016¹**, es menester considerar las normas de tránsito legislativo que dispuso el nuevo código adjetivo civil, que determinan los términos procesales para el asunto de autos.

En esa senda tenemos que, al tenor del numeral 4º del artículo 625 Código General del Proceso, en tratándose de procesos ejecutivos dispuso que, se aplicará la normativa anterior hasta vencido el tiempo para proponer excepciones, y de ahí, se continuará aplicando lo consagrado en el CGP.

En cuanto a los términos procesales que se encontraban en curso, en el numeral 5º del mismo artículo 625 CGP citado supra estableció: *“No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.”*

Así entonces, como la discusión gravita en punto al periodo durante el cual se debe cumplir la notificación al ejecutado del auto que ordenó librar mandamiento de pago, a fin de mantener la interrupción de la prescripción extintiva con la presentación de la acción ejecutiva, se resalta que dicho término ha de computarse conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, pues hasta ese punto aún no se ha otorgado término para proponer excepciones - Art 625-4 CGP -.

Esgrimido lo anterior, huelga traer a colación el contenido del artículo 90 CPC – hoy 94 CGP -, aplicable en asuntos de índole laboral por virtud de la remisión del artículo 145 CPLSS, donde se estipulan los efectos de la presentación de la demanda de cara a la prescripción, siempre que se cumpla cierta condición modificatoria dentro de un tiempo perentorio. Reza la norma: **“(…) La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado (…)”**.

Sobre la aplicabilidad en el trámite ordinario laboral y los efectos de la norma en comento, la Sala de Casación Laboral rememoró en Sentencia SL1617-2023 que:

“(…) Previo a decidir, debe advertirse que en materia laboral, las disposiciones que regulan la prescripción y su configuración, corresponden a los artículos 488 y 489 del CST y 151 del CPTSS; en cuanto, la interrupción, esta ocurre a través de dos mecanismos diferentes y no excluyentes: i) la extrajudicial, mediante la presentación al empleador del simple reclamo escrito por el trabajador respecto de un derecho determinado; y, ii)

¹ Acuerdo No. PSAA15-10392 del 1 de Octubre de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dispuso que la entrada en vigencia del Código General del Proceso será a partir del 1º de enero del año 2016, íntegramente.

con la presentación de la demanda, en los términos y condiciones señaladas por el artículo 90 del CPC, hoy artículo 94 del CGP (CSJ SL 5159-2020).

(...)

Ahora bien, en relación con la interrupción de la prescripción, de conformidad con el artículo 94 del CGP, esta Corporación en providencia CSJ SL3788-2020, adoctrinó que,

(...) no se aplica literalmente, de forma automática, es decir, con el simple conteo de términos, pues, de acuerdo con el principio de interpretación conforme que ha de orientar en todo caso la interpretación de la ley según el art. 4 de la Constitución, el juzgador debe evaluar si la tardanza en la notificación obedeció a la conducta negligente del actor o si, por el contrario, tuvo que ver con el proceder del despacho judicial o el de la demandada.

En este sentido, se adopta en sede de casación el criterio de la Sala que impregnó la decisión de instancia de la sentencia CSJ SL 4578-2014, donde, a pesar de que el auto admisorio de la demanda fue notificado luego de transcurrido más de los 120 días de que trataba el artículo 90 del CPC (esto fue antes de la modificación introducida por el art. 10 de la Ley 794 de 2003), la Corte tomó la fecha de la presentación de la demanda para dar por interrumpida la prescripción, porque tuvo en cuenta que la tardanza en la notificación no fue por culpa del demandante, en la medida en que, ante la renuencia del demandado a comparecer, el juez debió impulsar oficiosamente el proceso, art. 48 del CPT y SS, mediante el nombramiento de curador y hacer, a través de este, la notificación correspondiente, sin que fuera necesaria la petición de parte, ya que no fue el caso de que la dirección de la contraparte indicada en la demanda no existiera, en tanto que, por el contrario, el informe del citador indicaba que sí existía; además que el actor había cumplido con su carga de aportar todos los medios necesarios para que se diera la respectiva notificación. (...)”.

Así pues, se tiene que la normativa objetiva descrita **limita de manera explícita el acto de interrumpir la prescripción a que la orden de pago sea notificada al demandado o ejecutado (según sea el caso) dentro del año siguiente a su notificación al demandante**, lo cual, de no cumplirse dentro de dicho lapso, daría al traste con los efectos de interrupción generados con la simple incoación de la demanda, entendiéndose que la interrupción acontecería, entonces, a partir de la fecha de notificación del accionado.

Puestas de ese modo las cosas, a fin de dar respuesta a los argumentos blandidos por la parte activa en su recurso, frente a la forma de notificación del mandamiento de pago, se rememora que esta relieves dos puntos principalmente, el primero, relativo al conocimiento que la parte accionada tenía sobre la condena en su contra en el trámite ordinario; y en segundo término, que la solicitud de ejecución fue presentada dentro del término estipulado en el artículo 306 CGP, lo que daba lugar, según el entendimiento de la togada, **a que se diera la notificación del mandamiento a través de Estados**.

Lo primero a resaltar es que, con abstracción del hecho que pueda o no tener razón el apelante sobre este aspecto, lo cierto es que no se enarbó esta objeción en la etapa propicia para controvertir la forma de notificación de la orden de pago librada en su momento por el Despacho de primer grado - *Auto No. 076 del 25 de febrero de 2016 f. 3 a 6 Archivo 01 ED* -, que dispuso en su ordinal cuarto notificar inmediatamente “(...) **al ejecutado el presente mandamiento de pago, en el forma prevista en el artículo 108 del Código de Procedimiento Laboral**, advirtiéndole que disponen de un término de cinco (5) días para hacer el pago y diez (10) días para proponer excepciones (...)”, determinación contra la cual, de no haber estado conforme con la orden de notificación dada, ha debido la parte interesada interponer los recursos correspondientes, a fin de precisar lo relacionado con la forma de notificación según el término de interposición de la demanda, pues debe resaltarse que pese a la solicitud de medidas cautelares, la misma decisión de dar trámite al cobro compulsivo las negó.

Y es que el artículo 108 CPTSS atinente al trámite de los procesos ejecutivos en la jurisdicción ordinaria laboral precisa la forma de notificación de las decisiones que se dicten en el curso del juicio ejecutivo laboral, indicando que las providencias que se dicten en el curso de este juicio se notificarán por estados, salvedad hecha para la primera, “*que lo será personalmente al ejecutado*”, añadiendo que sólo serán apelables en el efecto devolutivo.

Esta claridad hacia recaer en el demandante la actuación relativa a la notificación del auto que libró mandamiento de pago a su deudor, no siendo dable entender como lo hizo, que la notificación de tal providencia se debía efectuar por estados, pues se le indicó con precisión el precepto que establece la notificación personal.

De haberse previsto que la notificación cabía realizarla por estados, la preceptiva que habilita dicha notificación era otra, esta es, el entonces artículo 335 CPC, (o en su defecto el 306 CGP), acorde con el cual: “*El mandamiento se notificará por estado, si la solicitud para que se libre el mismo se formula dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso. De lo contrario se notificará en la forma prevista en los artículos 315 a 320 y 330.*” (Negrillas fuera de texto).

Bajo esa idea, más allá de que la proposición de esta objeción resulte tardía, para ahondar en razones es menester resaltar que, de acuerdo con lo fijado en la normativa adjetiva civil aplicable para la fecha de presentación del ejecutivo de autos, el antecitado artículo 335 CPC - *hoy 306 CGP* -, se precisaba que la demanda se hubiere presentado en los sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la sentencia, y lo cierto es que la radicación del proceso ejecutivo que nos ocupa, se dio pasados varios meses después de la ejecutoria de la sentencia adiada 30 de septiembre de 2014, que precisó en sede de segunda instancia, los créditos laborales adeudados a los accionantes, cuyo proceso fue devuelto al Juzgado de origen el 19 de febrero de 2015, según reporte del aplicativo de Justicia Siglo XXI.

De ahí que, debe entenderse que el mandamiento de pago debía notificarse de manera personal, como lo ordenó la Juez de instancia, toda vez que dicha determinación quedó ejecutoriada.

Tampoco es relevante el hecho de que el ejecutado conozca que existe una sentencia condenatoria en su contra, que le impuso el pago de unos importes determinados en la providencia judicial, pues el debido proceso y el respeto de las formas propias de cada juicio son garantías atribuibles a todos los sujetos procesales, y en este caso constituye un imperativo legal la notificación personal del auto que libra mandamiento de pago contra el deudor, sea este de una sentencia judicial o de cualquier otro título que preste mérito ejecutivo, con la salvedad hecha para el caso de presentar la acción ejecutiva a continuación del proceso ordinario, siempre que ello se cumpla en el término que precisa la ley, circunstancia que fue precisamente la que se obvió por el ejecutante en el asunto *sub-exámine*.

Ahora, considera la Sala que tampoco encuentra mucho asidero lo argüido por los ejecutantes al mencionar que, en el curso del proceso se buscó el perfeccionamiento de medidas cautelares, pues como se dijo, al revisar el acontecer procesal, se observa que, en la providencia del mandamiento de pago se negó el decreto de medidas invocado en la demanda (f. 3 a 6 Archivo 01 ED). Luego, si bien se observa solicitud de nuevas medidas el 28 de junio de 2016 (f. 12 Archivo 01 ED), consistentes en el embargo de los créditos que en su favor tuviera el demandado ante el Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia, a las cuales accedió a decretar el Juzgado de primer grado (f. 17 Archivo 01 ED), en parte alguna de esta orden se desprende disposición relativa a suspender o abstenerse de materializar la notificación personal del demandado.

Además, si en gracia de discusión se aceptara lo anterior, no puede pasarse por alto que, en respuesta a los oficios librados (f. 26 a 29 Archivo 28 ED), en comunicados del **3 y 4 de agosto de 2016**, aquellas entidades dieron respuesta informando que el accionado no hacía parte de los proveedores o contratistas de estas, y por tanto no existía crédito en su favor pendiente de satisfacción, manifestación que, entonces, daba por sentada la imposibilidad de materializar la medida dispuesta por el Juzgado.

A partir de allí, y sin solicitud pendiente de resolverse por cuenta del Juzgado, la parte ejecutante solo acudió nuevamente a gestionar el decreto de nuevas medidas, en memorial del **4 de octubre de 2019** (f. 45 a 46 Archivo 01 ED), a las cuales se accedió a dar trámite en decisión del 23 de octubre siguiente, lo cual fue ampliado en Auto del 5 de noviembre de 2019, inscritas debidamente en los respectivos registros (Cámara de Comercio – Secretaría de Tránsito), los días 5 y 28 de noviembre de 2019 (f. 51, 57 a 58, 65 a 66 y 88 Archivo 01 ED).

Posteriormente, el extremo activo petitionó otra cautela el 6 de noviembre de 2019, negada en providencia del 8 de noviembre de 2019, (f. 68 Archivo 01 ED).

En ese sentido, solo a través de memorial radicado el 9 de febrero de 2023, la parte accionante solicitó seguir adelante con la ejecución, en atención a que entendía que el demandado estaba notificado por estados del mandamiento ejecutivo (Archivo 17 ED), petición a la que, por obvias razones, no dio trámite el Juzgado de primer grado, tras considerar que desde el mandamiento de pago se dispuso la notificación personal del ejecutado, la cual procedió a efectuar la propia dependencia judicial el 21 de febrero de 2023 en los términos de la Ley 2213 de 2022, misma que se entendió surtida el 24 de febrero hogano (Archivos 19 y 20 ED).

Lo anterior permite evidenciar que la gestión de la parte actora en punto de la consecución de las medidas cautelares solicitadas y la notificación personal del ejecutado, no fue la más diligente, como quiera que, por lo menos desde agosto de 2016, cuando se supo de la falta de efectividad de la medida de embargo peticionada, nada obstaba para que procediera a efectuar las diligencias de notificación correspondientes, pero en este escenario, transcurrieron varios años sin gestión por parte de los interesados, situación reiterada seguido de las cautelas solicitadas en octubre de 2018, inscritas en el mes de noviembre de esa anualidad, pues pese a tener conocimiento de que estas medidas surtieron efecto, solo se acordó del asunto relativo a la notificación en el mes de febrero de 2023, es decir, pasados mas de tres (3) años después de la notificación del auto que libró mandamiento de pago.

Tales circunstancias, precisa la Sala, reflejan que a partir de la radicación de la demanda, no pueden predicarse en este caso los efectos de la interrupción de la demanda, sino que dicho momento, conforme la normativa procesal evocada en líneas anteriores, **debe tenerse a partir de la notificación del demandado**, esto es, el 21 de febrero de 2023 (Archivos 20 ED), fecha para la cual, teniendo en cuenta que la sentencia de segunda instancia data del 30 de septiembre de 2014 y que la providencia que aprobó las costas procesales, fue notificada el 23 de noviembre de 2015², emerge en evidente que estaba vencido el plazo trienal requerido para la consolidación de la figura extintiva invocada por el ejecutado, lo que no dejaba otra camino sino declarar probada esta excepción.

Así las cosas, comparte la Corporación la prosperidad del medio exceptivo propuesto por la parte pasiva, debiendo confirmar la decisión recurrida. Las costas en esta instancia estarán a cargo de los demandantes, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a medio (1/2) SMLMV.

² <https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs>

Sin que sean necesarias más consideraciones, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 15 de agosto de 2023, proferida por el JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por **MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ PÉREZ y JUAN DIEGO MÚNERA ÁLVAREZ** en contra de **MARIO ADOLFO BUSCHE VENGOECHEA**.

SEGUNDO: Las **COSTAS** en esta instancia están a cargo de los demandantes, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a MEDIO (1/2) SMLMV.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 187 del 01 de noviembre de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>